



► Nota informativa sectorial de la OIT

Mayo 2020

La COVID-19 y los servicios públicos

La pandemia de coronavirus-19¹, considerada la peor crisis en el mundo del trabajo después de la Segunda Guerra Mundial, tiene un impacto masivo en los sistemas de salud y repercusiones devastadoras para la economía mundial y las sociedades. Hasta la fecha, la pandemia ha dado lugar a la aplicación de medidas de emergencia drásticas en la mayor parte de los países del mundo.

► Cada Estado tiene la responsabilidad primordial y principal de ocuparse de las víctimas de desastres naturales y otras situaciones de emergencia que se produzcan en su territorio. Por tanto, corresponde al Estado afectado la función principal en la iniciación, organización, coordinación y prestación de asistencia humanitaria dentro de su territorio.

► **Naciones Unidas**, resolución 46/182 de la Asamblea General, de 19 de diciembre de 1991. Principios rectores, párrafo 4.

El Secretario General de las Naciones Unidas ha exhortado a fortalecer los servicios públicos para luchar contra la pandemia y ha señalado que “no podemos recurrir a las herramientas usuales en tiempos tan inusuales”². Ahora se reclama ampliamente tener un “gobierno grande” a fin de salvar al mundo de la pandemia, incluso por parte de los que antes consideraban al gobierno como una amenaza para la libertad y el libre mercado³.

A medida que la respuesta ha llevado a algunos países a crear una economía basada en la emergencia, con un Estado que desempeña un papel más importante, los servicios públicos se han situado en primera línea. Los gobiernos los han mantenido funcionando en la medida de su capacidad, proporcionándoles medios de forma remota, pero muchos de ellos han reducido algunas operaciones para mantener seguros a sus empleados, como ocurre con los servicios de recolección de residuos, de transporte, judiciales y postales. Solamente se han cancelado las operaciones de algunos aeropuertos y se han suspendido actos culturales y otros servicios que implicaban la reunión de grandes cantidades de personas. Otros gobiernos han reclutado a trabajadores no esenciales para trabajar en apoyo a los esenciales, por ejemplo en la fabricación de equipos de salud. La tecnología ha permitido llevar a cabo tareas de control y actividades laborales que tan solo unos meses antes de la crisis no eran posibles o aceptables, por ejemplo trabajar a distancia en toda una empresa o seguir los desplazamientos de las personas y de las que están muy cerca de personas infectadas para controlar el virus.

Además de los trabajadores sanitarios y docentes, todos los funcionarios públicos desempeñan una función en la contención de la propagación y la recuperación de la

1 Las fuentes citadas en este documento no designan del mismo modo el virus y la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado una nota para uniformizar el uso. El material publicado antes de que el virus recibiera su nombre oficial no se actualizará a menos que sea necesario para evitar confusiones. Véase OMS: «[Los nombres de la enfermedad por coronavirus \(COVID-19\) y del virus que la causa](#)» (SRAS-Cov-2).

2 Antonio Guterres (2020). «[Declaraciones del Secretario General sobre la COVID 19: Un llamado a la solidaridad](#)», (Discurso de apertura del Secretario general en la conferencia virtual de prensa sobre la crisis de COVID-19), 19 mars.

3 Naomi Oreskes (2020) «[We Need Big Government to Save Us From the Pandemic](#)» (necesitamos in gobierno grande para salvarnos de la pandemia), edición internet de la revista, édition en ligne du magazine Time, 17 de abril.

pandemia. Esto es cierto con independencia de cuál sea su ocupación: tanto si trabajan en la administración del Estado, por ejemplo los recaudadores de impuestos, los agentes de policía o los funcionarios de prisiones, o bien ejecutan las políticas económicas o sociales, como los inspectores del trabajo; al igual que los que proporcionan servicios a la comunidad, como los recolectores de residuos, o los que apoyan los sistemas obligatorios de seguridad social, como los trabajadores sociales. Los funcionarios públicos, como guardianes de los bienes públicos, son vehículos imprescindibles para la recuperación. La pandemia de COVID-19 pone de manifiesto la importancia crucial de la preparación para casos de desastre y el hecho de que los socios del sector privado no pueden gestionar por sí solos el alcance de las intervenciones que ahora son necesarias.

La presente nota informativa se propone resumir los principales debates en curso acerca del papel que desempeñan los gobiernos y los funcionarios públicos en la respuesta a la crisis, y de los desafíos que estos

afrontan durante la pandemia y en la recuperación. Habida cuenta de que las crisis sanitarias son cada vez más frecuentes, los Estados Miembros deberán realizar más esfuerzos para prepararse con antelación y proporcionar a los funcionarios públicos la capacitación y el equipo necesarios para intervenir en dicha preparación, así como para brindarles la oportunidad de participar en ella a través del diálogo social.

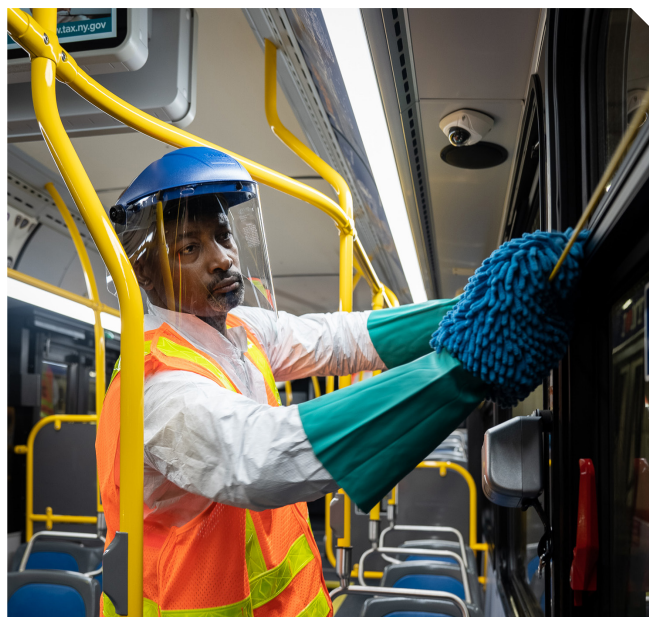
A fin de generar confianza en las instituciones estatales, lo cual es fundamental ⁴, los Estados deberían proteger la independencia de los funcionarios públicos, incluidos los denunciantes de irregularidades. Como un bien público mundial ⁵, el sistema multilateral debe ayudar a coordinar y fortalecer los servicios públicos, que son tan fundamentales en la respuesta mundial como la investigación científica y los servicios de salud.

► 1. El impacto de la COVID-19

►► En el futuro, a medida que los servicios públicos siguen creciendo y se vuelven más complejos, se prevé que los riesgos en materia de salud y seguridad en el trabajo aumenten y se generalicen cada vez más.”

► Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo de la OIT.⁶

Este futuro previsto ya es la realidad del presente: en el contexto de la pandemia actual, el personal que presta cuidados personales, los recolectores de residuos y los trabajadores de los servicios de primeros auxilios, que incluyen a agentes de policía y personal sanitario, así como los funcionarios de prisiones, se encuentran entre las personas más expuestas a las infecciones en



© Andrew Cashin / MTA New York City Transit
La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York desinfecta las estaciones y trenes subterráneos.

4 Organización Mundial de la Salud (OMS), Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación (2019), “[Un mundo en peligro: Informe anual sobre preparación mundial para las emergencias sanitarias](#)”.

5 Véase Kevin Rudd (2020), “[Kevin Rudd on America, China and saving the WHO](#)”, The Economist, 15 de abril.

6 D. LeGrande (2011), “[Riesgos de salud y seguridad ocupacional en servicios públicos y gubernamentales](#)”.

los Estados Unidos y el Reino Unido ⁷. Esos grupos, al igual que los trabajadores de los servicios públicos de emergencia, no pueden negarse a trabajar en estrecho contacto con ciudadanos que pueden estar enfermos.

La pandemia ha tenido algunas repercusiones negativas sobre la preparación para situaciones de emergencia en forma de reducciones en el empleo y los fondos públicos que fueron aprobados después de la crisis financiera de 2008 ⁸. Los funcionarios públicos están afectados por algunos otros factores:

- Si caen enfermos, pueden ser víctimas del estigma y la discriminación, por ejemplo siendo excluidos del acceso a los servicios médicos ⁹. Es posible que a pesar de su propio sufrimiento se espere que presten servicios a otras personas afectadas,
- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el personal de los servicios de primeros auxilios y otros trabajadores públicos pueden ser víctimas de

la violencia y el acoso por parte de ciudadanos que rechazan las medidas restrictivas ¹⁰.

- Pueden carecer del equipo y las redes profesionales adecuadas cuando trabajan desde su hogar u otros lugares remotos ¹¹.
- Algunos de ellos no están protegidos por los estatutos de la función pública y han sido despedidos, como ocurrió en el caso de los trabajadores subcontratados del metro en Chile ¹².
- Con frecuencia algunos gobiernos pagan sus salarios con grandes demoras, lo que expone aún más a las crisis financieras a los funcionarios públicos ¹³.

La difícil situación de los funcionarios de prisiones exige medidas urgentes: las cárceles son lugares propicios al contagio, y en muchos países el pánico resultante ha dado lugar a motines y muertes ¹⁴.

► 2. Respuestas de los mandantes y de los interlocutores sociales

Muchos Estados Miembros han adoptado algunas de las siguientes medidas para abordar el rápido contagio de la COVID-19:

- aumento sustancial del presupuesto de los servicios de salud, revirtiendo las anteriores medidas de reducción presupuestaria ¹⁵;
- apremio a los ciudadanos para quedarse en casa y mantener la distancia entre sí;
- órdenes de cerrar los comercios y los servicios públicos no esenciales;

- disposición de que los funcionarios públicos trabajen desde su domicilio, usando la tecnología disponible;
- ofrecimiento de servicios gubernamentales telefónicos y por la internet, y hacer respetar los requisitos de distancia e higiene cuando dichos servicios no sean posibles;
- seguimiento de los desplazamientos de las personas sospechosas de ser portadoras del virus y de las que están en estrecho contacto con ellas, combinado con la realización de pruebas extensivas.

7 Lukas Kikuchi e Ishan Khurana (2020), "[The Jobs at Risk Index \(JARI\): Which occupations expose workers to COVID-19 most?](#)", *Autonomy*, 24 de marzo; Lazaro Gamio (2020), "[The Workers Who Face the Greatest Coronavirus Risk](#)", *The New York Times*, 15 de marzo; Gabrielle Olya (2020), "[The 50 Most Dangerous Jobs for Contracting COVID-19](#)", *GOBankingRates*, 28 de abril.

8 Véase, por ejemplo, Polly Toynbee, Leo McCann, Paresh Wankhade y Peter Murphy (2019), "Conclusion: Understanding Emergency Services in Austerity Conditions", en *Critical Perspectives on the Management and Organization of Emergency Services* (Nueva York: Routledge).

9 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020), "[La discriminación y el estigma relacionados con el COVID-19: ¿un fenómeno mundial?](#)", 25 de mayo.

10 Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2015), "Employment promotion in disaster response: Worker needs and challenges in post-Haiyan Philippines disaster settings", pág. 52.

11 J. O'Halloran (2020), "[UK employees complain of lacking tools to work at home effectively](#)", *Computer weekly*, 4 de junio.

12 "[Trabajadores de Metro se manifiestan por vulneraciones laborales en medio de crisis sanitaria por Covid-19](#)", (Chile), *El Periodista*, 30 de marzo de 2020.

13 Por ejemplo, en 2019 la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT formuló observaciones y/o peticiones directas sobre atrasos salariales en el sector público de Benin, Camerún, Comoras, Côte d'Ivoire, Gabón, Guatemala, Libia, Malí, Mauritania, República de Moldova, Polonia, Tayikistán, Uganda y Zambia.

14 Noticias ONU, "[COVID-19: UN teams step up efforts to protect rights in prisons, as revolts intensify worldwide](#)", 5 de mayo de 2020.

15 Además de muchos Estados miembros de la UE, los Estados Unidos y algunos gobiernos regionales de Australia y el Canadá, véanse Fiji (Vijay Narajan, "[COVID-19 Response Budget: Health and COVID-19 Response](#)", 26 de marzo de 2020); Panamá ("[Presupuesto 2020 se reorientará para atender emergencia sanitaria causada por el COVID-19](#)", *El Capital Financiero*, 30 de marzo de 2020); Perú ("[Decreto Supremo N° 072-2020-EF, 5 de abril de 2020](#)"); e Indonesia (Dion Bisara, "[Indonesia drops 3% budget deficit cap for \\$25b Covid-19 stimulus](#)", *Jakarta Globe*, 31 de marzo de 2020). La UE suspendió los límites de la deuda para sus Estados miembros.

En resumen, se ha centrado la atención en reducir el contacto social ajustando la mayoría de las actividades no esenciales al modo de pausa, usando la tecnología para prestar otros servicios, y concentrándose en las actividades que son esenciales. Los gobiernos con grandes reservas o crédito han asumido los gastos de las actividades comerciales inactivas; algunos han podido orientar las actividades de importantes sectores hacia la protección de la salud de la población. Además de poner en práctica modalidades de trabajo a distancia, los gobiernos han postergado las medidas relativas al personal; han permitido que los servicios públicos recuperaran a empleados jubilados; han brindado apoyo a los funcionarios públicos en forma del cuidado de niños y otros servicios sociales; han adelantado el pago de los salarios; o han reducido el sueldo de los funcionarios altamente remunerados, tanto para subvencionar la respuesta como para transmitir un mensaje de solidaridad con los que deben enfrentarse a la crisis en primera línea. A pesar de que la mayor parte de las medidas relacionadas con el trabajo han sido impuestas de forma unilateral por los gobiernos, éstas pretenden ser temporales y algunos gobiernos nacionales y locales han realizado consultas con las organizaciones de funcionarios públicos acerca de las medidas existentes para proteger al personal. En algunos casos, han convenido en propiciar los acuerdos vigentes que establecen modalidades de licencia y el suministro de equipos de protección personal. No obstante, la mayoría de los países necesitarán ayuda financiera y técnica para aplicar dichas medidas.

Las organizaciones de funcionarios públicos han pedido que los gobiernos inicien consultas; han abandonado los planes para realizar huelgas por motivos económicos o han llevado a cabo protestas para exigir más medidas de protección; o han solicitado a los gobiernos que aclaren los términos “servicios críticos” y “personal crítico”¹⁶. Los sindicatos también han pedido equipos de protección, disposiciones flexibles en materia de licencias, el pago continuado de los salarios y los subsidios de enfermedad, así como un diálogo permanente entre los sindicatos y las autoridades para los trabajadores sociales, los que prestan asistencia en residencias para gente mayor, los que dispensan cuidados a domicilio y los que están subcontratados, así como para el personal penitenciario¹⁷.

Desafíos que plantea la recuperación

Afrontar la pandemia conllevará la transformación de las economías, quizá de forma irreversible. Los países con gran capacidad técnica pueden hacer que las medidas de gobierno electrónico pasen a tener carácter permanente o generalizado, mientras que los que carecen de esa capacidad pueden quedar rezagados. En los primeros, dichas medidas plantean dudas acerca del papel de la tecnología en los nuevos lugares de trabajo. Por ejemplo, los gobiernos pueden prestar más servicios sin añadir personal, involucrar a empresas del sector privado para prestar servicios públicos, o incluso comercializar con ellas. Esto requiere garantizar que los trabajadores que ofrecen tales servicios puedan llevar a cabo sus tareas sin influencias externas indebidas, como se dispone en el [Convenio sobre la inspección del trabajo](#), 1947 (núm. 81) y el [Convenio sobre la administración del trabajo](#), 1978 (núm. 150).

Además, la transición planteará los siguientes desafíos para los empleadores públicos:

- abordar las cuestiones éticas relacionadas con la privacidad del trabajador y el ciudadano en el uso de las tecnologías de control;
- proporcionar posibilidades de aprendizaje a los trabajadores sobre el uso de las nuevas tecnologías, a fin de optimizar las oportunidades resultantes para los trabajadores;
- ofrecer igualdad de acceso a la infraestructura digital avanzada dentro de los países y entre ellos, a fin de evitar las disparidades en los ingresos; y
- facilitar protecciones en materia de salud y seguridad en el trabajo (SST) a los trabajadores que deben asistir al trabajo en caso de una segunda ola de COVID-19.

Es posible que algunos responsables de formular las políticas promuevan reducciones presupuestarias, como ocurrió en el decenio posterior a 2008. Esas medidas llevaron a muchos trabajadores calificados a emigrar, despojando de talento a los servicios públicos¹⁸. En esta ocasión, los empleadores públicos pueden aumentar temporalmente el personal y el excedente resultante puede utilizarse para mitigar

16 Professional Institute of the Public Service of Canada, “[Calling for a clear definition of ‘critical’ federal government services](#)”, 2020

17 EPSU (2020), “The safety and staffing challenges facing health and social services”, 19 de marzo; S. Jenkins (2020), “Services Australia to receive extra 5000 workers”, The Mandarin, 23 de marzo; EPSU (2020), “[Fighting COVID-19 in prisons and detention centres in Europe](#)”, 19 de marzo.

18 Véanse, por ejemplo., Bryan M. Evans, Carlo Fanelli (editores), *The Public Sector in an Age of Austerity: Perspectives from Canada's from Canada's Provinces and Territories* (McGill-Queen's University Press, 2018), pág. 193; Evangelia Marinakou, Charalampos Giousmpasoglou y Vasileios Paliktzoglou, “[The Brain Drain Phenomenon in Higher Education in Greece: Attitudes and Opinions on the Decision to Immigrate](#)”, documento presentado en la Tercera Conferencia Internacional Anual sobre Humanidades y Arte en un Mundo Global, celebrada en Atenas, Grecia, los días 3 a 6 de enero de 2016.

el aumento de la demanda de servicios en futuras crisis. El incremento de las estructuras para el trabajo a distancia puede facilitar las transferencias temporales mutuamente acordadas a los servicios esenciales.

El papel de los trabajadores de la administración pública en la recuperación

La crisis ha puesto en evidencia la falta de preparación generalizada, la debilidad de los organismos gubernamentales que funcionan sin presupuestos adecuados, coordinación y solidaridad, la fragilidad de las cadenas de suministro "justo a tiempo" y los múltiples grupos de segmentos vulnerables de la población, a los que será necesario proteger de futuros contagios. Los funcionarios públicos deben ofrecer información precisa sobre la crisis, seguir haciendo funcionar los servicios, mantener el orden, proporcionar apoyo a la población afectada y, cuando sea posible, asegurar una transición suave a la actividad económica normal.

Los gobiernos deberían coordinar la recuperación de la crisis entre los distintos niveles de la administración pública --incluidos los gobiernos locales-- y con el sector privado. Deberían hacerlo de forma que se reduzcan las desigualdades que agravan los efectos de la crisis y se movilice a los ciudadanos para activar la recuperación a largo plazo.

Muchos servicios públicos son fundamentales para la recuperación posterior a la COVID-19. Además de organismos esenciales como los ministerios de salud, la administración pública y otros ministerios; los servicios de SST, sanitarios y de inspección del trabajo; las oficinas de comunicación y los programas de protección social; los siguientes servicios públicos desempeñan funciones fundamentales en la recuperación:

- **Los organismos de investigación científica** deben encontrar formas de desarrollar tratamientos y vacunas para inmunizar al personal de primera línea y la población general contra la COVID-19. En este campo existe una cooperación internacional sin precedentes ¹⁹.
- **Los ministerios de salud** tienen múltiples responsabilidades en la pandemia, incluidas la gestión de las políticas relativas a los trabajadores sanitarios y la recopilación y procesamiento de datos para seguir la circulación del virus. Los funcionarios públicos con esas competencias pueden ser transferidos a las pertinentes oficinas.
- **Los gobiernos locales** coordinan muchos servicios públicos de primera línea y han venido compartiendo información sobre las experiencias en otros países, principalmente a través de asociaciones de gobiernos locales, como han hecho las Asociaciones Nacionales de Gobiernos Locales y Regionales de África con sus contrapartes en la Unión Europea (UE), pero tienen dificultades por la disminución de los ingresos ²⁰.
- **Los organismos de protección del consumidor y el ciudadano** hacen cumplir los controles de precio establecidos para impedir que los comerciantes especulen con los bienes más escasos, y protegen a los ciudadanos contra la discriminación ilegal en las medidas de protección social, como han hecho en Sudáfrica y Portugal ²¹.
- **Los órganos de control público** velan por la transparencia en las grandes transacciones para apoyar la recuperación, como se ha legislado en el Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos. Además, las políticas de protección de denunciantes de irregularidades pueden ayudar a eliminar los comportamientos contrarios a la ética en dichas transacciones, como recomienda la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ²².
- **La mayoría de los servicios de abastecimiento de agua** son entidades públicas, y son esenciales para poner en práctica la recomendación de lavarse las manos, en particular en los países que carecen de saneamiento y condiciones de higiene. En Bangladesh, Guinea, Honduras, Madagascar y Perú, por ejemplo, se han aplicado las medidas pertinentes a tal efecto ²³.
- **Los transportes públicos** han garantizado la movilidad de los trabajadores esenciales, como es el caso de Azerbaiyán, de manera que se han mantenido las pocas actividades que

19 Organización Mundial de la Salud (OMS), "Declaración pública en apoyo de la colaboración para el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19", 13 de abril de 2020.

20 Véanse UCLG Africa, "Interaction between the Associations of Local and Regional Governments and European Union (EU) delegations in the framework of the programming process of the EU Cooperation (2021/2027) in Africa" (comunicado de prensa, 7 de mayo de 2020), y OCDE, "The territorial impact of COVID-19: managing the crisis across levels of government", 3 de abril de 2020.

21 Véanse Regulations and directions: "Consumer and customer protection during Coronavirus COVID-19 lockdown" (Sudáfrica, 19 March 2020) y Centre for Social Studies, "Coronavirus COVID-19 outbreak in the EU Fundamental Rights Implications- Portugal", Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 23 de marzo de 2020.

22 Véase Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE, 2020), "Integridad pública para una respuesta y recuperación efectivas ante el COVID-19", 29 de abril.

23 Véase Sanitation and Water for All (2020), "Experiencias de los países con la COVID-19 y WASH", 27 de marzo.

han seguido funcionando, con el consiguiente gran riesgo para los conductores y los equipos de mantenimiento ²⁴.

- **Los organismos de protección de la fauna silvestre** establecen la prohibición del tráfico de animales, como se ha promulgado en China, una medida que ayuda a prevenir la propagación de enfermedades zoonóticas como la COVID-19 ²⁵.
- **Los servicios penitenciarios** ayudan a contener la propagación entre los reclusos que viven en espacios reducidos propicios al contagio, como ha ocurrido en el Brasil y otros países ²⁶.
- **Las oficinas aduaneras** controlan el flujo de personas a través de las fronteras para reducir el contagio. En Cuba, la oficina ha asegurado el intercambio oportuno de información anticipada sobre pasajeros con las autoridades de control sanitario ²⁷.
- **Los sistemas judiciales** previenen la discriminación y la vulneración de los derechos humanos por el uso de la tecnología de control, y resuelven los conflictos que los ciudadanos pueden tener con los empleadores y acreedores ²⁸.

Dentro de cada uno de estos servicios públicos se encuentran funcionarios de todos los niveles de jerarquía, y su conocimiento de la realidad sobre el terreno es fundamental para forjar la competencia por la cual es respetada. Las cuestiones que los afectan deben abordarse a todos los niveles y mediante un enfoque integrador transnacional semejante al que se adoptó para afrontar la crisis del VIH, ajustado a las particularidades de la COVID-19.

La preparación eficaz para la pandemia exige disponer de unos servicios públicos sólidos y sostenibles que sepan ganarse la confianza de la población. Los países con un nivel elevado de confianza en los funcionarios públicos han realizado esfuerzos relativamente satisfactorios en los que han participado múltiples servicios públicos. Habida cuenta de que esta confianza depende del “desempeño de los gobiernos en cuanto a garantizar el bienestar económico, la asistencia social u otros bienes” ²⁹, los gobiernos deben desarrollar las competencias de los funcionarios públicos, proporcionarles las herramientas necesarias y establecer mecanismos para el diálogo social entre gobiernos, organismos gubernamentales y representantes de los trabajadores. Se requiere un enfoque internacional, ya que “las normas del trabajo de un país se correlacionan positivamente con las de otros lugares” ³⁰.

► 3. Herramientas y respuestas de la OIT

Los Estados Miembros pueden abordar muchas de las cuestiones planteadas a lo largo de la presente nota informativa a través del diálogo social: no solo el intercambio de información, sino también las consultas sobre las medidas que deben adoptarse y las negociaciones sobre el impacto de cualquier medida en las condiciones de trabajo. Como se señala en las [Directrices de la OIT sobre el trabajo decente en los servicios públicos de urgencia](#) (2018), “los acuerdos colectivos y otros procesos de diálogo social pueden promover relaciones laborales de cooperación basadas en la resolución conjunta de los problemas y la colaboración en los planos nacional, regional o local” ³¹ y ayudan a conservar a los trabajadores cualificados que

apoyan la preparación para situaciones de emergencia. Un diálogo social eficaz debe fundamentarse en el derecho a afiliarse a las organizaciones de trabajadores y el derecho efectivo a participar en la negociación colectiva, como se establece en el [Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación](#), 1948 (núm. 87); el [Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva](#), 1949 (núm. 98); y el [Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública](#), 1978 (núm. 151). Los tres convenios abarcan todas las modalidades contractuales de la administración pública, incluso cuando “la subcontratación se usa para ocultar la existencia de una relación de trabajo real” ³². El [Convenio sobre la](#)

24 Asociación Internacional de Transporte Público (2020), “[Guardians of Mobility: from the Front Lines in Baku, Azerbaijan](#)”, 30 de abril.

25 Fondo Mundial para la Naturaleza (2020), “[COVID-19 and Wildlife Trade: Perspectives and Proposed Actions](#)”, 9 de julio.

26 Conectas Direitos Humanos (2020), “[Os Riscos da Covid-19 nas Prisões: Conheça as Ações Da Conectas](#)”, 14 de abril.

27 Organización Mundial de Aduanas, “[What Customs can do to mitigate the effects of the COVID-19 pandemic: Highlights of WCO Members' practices](#)”, segunda edición, 16 de abril de 2020.

28 Comisión Internacional de Juristas (2020), “[The Courts and COVID-19](#)”, 5 de mayo de 2020.

29 Jack Barbalet (2019), “[The Experience of Trust: Its Content and Basis](#)”, en Masamichi Sasaki (Ed.), *Trust in Contemporary Society* (Brill), pág. 18.

30 Ronald Davies y Krishna Vadlamannati (2013), “[Race to the Bottom in Labor Standards? An Empirical Investigation](#)”, *Journal of Development Economics*, vol. 103, julio, pág. 1.

31 Párrafo 21, parte 3.

32 Organización Internacional del Trabajo, Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, “[La negociación colectiva en la administración pública: un camino a seguir](#)”, Informe III (parte 1B) de la Conferencia Internacional del Trabajo, 102ª reunión, párrafo 96, 2013.

[negociación colectiva](#), 1981 (núm. 154) también insta a los gobiernos a que promuevan la negociación colectiva en el sector público, habida cuenta de que las soluciones acordadas pueden apoyar la preparación y la respuesta ante las crisis. En el plano nacional, el Convenio núm. 150 propone que las actividades particulares pertenecientes a la política laboral nacional de un país pueden regularse mediante negociaciones directas entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores. La tecnología de la información puede proporcionar los medios para abordar tanto las preocupaciones en materia de salud como el diálogo social.

La OIT cuenta con diversos instrumentos que se ocupan de las cuestiones planteadas por las organizaciones de funcionarios públicos. El [Convenio sobre la higiene \(comercio y oficinas\)](#), 1964 (núm. 120) abarca a los trabajadores de oficinas en la administración pública, e insta a sus empleadores a que mantengan todos los locales y equipos en buen estado de conservación y de limpieza, y a que dichos locales dispongan de agua potable o cualquier otra bebida sana en cantidad suficiente, así como de instalaciones sanitarias y para lavarse apropiadas y en número suficiente. En los casos en que los funcionarios públicos se alojan en la propiedad del empleador, la [Recomendación sobre la vivienda de los trabajadores](#), 1961 (núm. 115) dispone que los empleadores deberían proporcionar instalaciones sanitarias y para lavarse adecuadas. Asimismo, los ciudadanos han confiado en los servicios públicos prestados por trabajadores poco remunerados durante los confinamientos. Los gobiernos deberían reconocer y compensar de forma apropiada a estos funcionarios públicos y prever cómo repercutirá sobre ellos la nueva tecnología.

Esto puede lograrse proporcionándoles los medios para adquirir las competencias necesarias e integrando medidas de diseño del trabajo y de aprendizaje permanente antes de adoptar innovaciones tecnológicas. Los funcionarios públicos que realizan teletrabajo como un arreglo permanente, sea a tiempo completo o parcial, y no en alternancia con el trabajo basado en la oficina, deberían disfrutar de igualdad de trato con otros asalariados, como dispone el [Convenio sobre el trabajo a domicilio](#), 1996 (núm. 177) ³³.

El [Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores](#), 1981 (núm. 155) exige a los empleadores que proporcionen a sus empleados la formación apropiada en materia de SST, y que se aseguren de que los representantes de los trabajadores reciben la información adecuada sobre las medidas adoptadas para garantizar la SST. Asimismo, insta a los empleadores a que permitan a los trabajadores y a sus representantes u organizaciones representativas examinar todos los aspectos de la SST asociados con su trabajo, y a que los consulten sobre estas cuestiones, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales. Los trabajadores deben cumplir los requisitos en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo.

La [Recomendación sobre la violencia y el acoso](#), 2019 (núm. 206) pide a los gobiernos que adopten medidas para proteger a los trabajadores que están más expuestos a sufrir violencia y acoso, como el personal de los servicios de salud y emergencia, los trabajadores sociales y del transporte, y los que trabajan en aislamiento.

Por su parte, la [Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia](#), 2017 (núm. 205) reconoce la importancia de una buena gobernanza y de luchar contra la corrupción y el clientelismo en la prevención de las emergencias. Asimismo, protege los derechos en el trabajo, la salud y la seguridad y las condiciones laborales de todos los trabajadores que participan en la respuesta a las crisis. Además, exhorta a las autoridades públicas a que adopten y apliquen una estrategia de empleo integral y sostenible para proteger los medios de vida, fomentar el empleo y el trabajo decente y las oportunidades de generación de ingresos, tanto durante las crisis como después de ellas. Una gran variedad de otras normas internacionales del trabajo incluye orientaciones específicas sobre las medidas de política en el sector público que promueven un enfoque de la crisis actual y de su recuperación centrado en las personas ³⁴.

Las administraciones públicas y las organizaciones de funcionarios públicos tienen un papel decisivo que desempeñar en la respuesta a la pandemia a través del diálogo social, la preparación y la respuesta en caso de emergencia. Los sistemas de relaciones laborales sólidos pueden ayudar a

³³ Véase Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, [Estudio General de 2020](#), Informe III (parte B) de la Conferencia Internacional del Trabajo, 109ª reunión, párrafo 635, 2020. Por ejemplo, 44 de 100 empleadores de los Estados Unidos encuestados por McKinsey entre el 7 y el 13 de mayo de 2020 estimaban que por lo menos una cuarta parte de sus empleados basados en la oficina podrían trabajar desde su casa de forma permanente.

³⁴ La publicación de la OIT "[Las normas de la OIT y el COVID-19 \(coronavirus\)](#)" expone que el respeto de las disposiciones fundamentales de esos instrumentos ayuda a mantener el trabajo decente adaptándose al mismo tiempo a la pandemia.

los gobiernos a mantener una administración pública de máxima calidad y a reducir la fuga de cerebros. Los gobiernos y las organizaciones de funcionarios públicos también pueden establecer programas conjuntos de capacitación en materia de gestión de la reducción de desastres en los planos nacional y local. Comparten una gran responsabilidad que solamente puede asumirse con coordinación y la mejor información y asesoramiento posibles. La comunidad internacional debería ayudar en este esfuerzo, como tendría que hacerlo en otras pandemias y en las crisis relacionadas con el clima u otros desastres.

Contactos

Organización Internacional del Trabajo
Route des Morillons 4
CH-1211 Ginebra 22
Suiza

Departamento de Políticas Sectoriales
E: covidresponsesector@ilo.org